

GUARDA Y CUSTODIA EXCLUSIVA MADRE. DENEGACION PRIVACION PATRIA POTESTAD. INTERES DEL MENOR. MENOR 12 AÑOS. REGIMEN DE VISITAS PROGRESIVO. Hija de 12 años que solo ha visto a su padre 1 vez, solo ha hablado 1 vez con el por teléfono, negándose en rotundo a relacionarse con el. Debe recordarse que tanto la patria potestad como el conjunto de actuaciones y medidas que se adopten respecto de los menores han de guiarse, como principio general y prevalente a cualesquiera otros en juego, incluido el de los padres o allegados, **por el superior interés y beneficio del menor**

La patria potestad está concebida por la Ley en beneficio de los hijos y requiere el cumplimiento de los deberes descritos en el art. 154 del Código Civil, **de manera que cualquier limitación al ejercicio de la patria potestad**, debe salvaguardar el principio de protección del interés del menor, teniendo carácter excepcional privación de la patria potestad, debido a su gravedad, pudiendo aplicarse solamente en casos extremos, de modo que

- no basta la sola constatación de un incumplimiento, incluso grave, de los deberes paterno-filiales,
- sino que es necesario que su adopción venga aconsejada por las circunstancias concurrentes y resulte conveniente en un determinado momento y resulte conveniente para los intereses del menor, sin exceder de lo estrictamente necesario para lograr la mencionada finalidad de protección del interés del menor.

Sentencia Audiencia Provincial de Valladolid de 11 octubre 2022 Número Sentencia: 362/2022 Número Recurso: 306/2022 Numroj: SAP VA 1810:2022 Ecli: ES:APVA:2022:1810 Ponente: [EMMA GALCERÁN SOLSONA](#) Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 10 de VALLADOLID

Cabecera: Ejercicio de la patria potestad. Guarda y custodia de hijo menor de edad. Guarda y custodia compartida o conjunta

En el recurso de apelación interpuesto por el demandante, se solicita la revocación de la sentencia de primera instancia, y la estimación íntegra de la demanda, en la que se solicitó que se acuerde la privación a la madre de la patria potestad sobre la hija común, menor de edad, así como la atribución de la patria potestad en exclusiva al padre y la **atribución de la guarda y custodia de la menor** en exclusiva al padre, residiendo en el domicilio del padre en la ciudad de Lérida, estableciéndose asimismo un régimen de visitas para la madre consistente en fines de semana alternos de 10 h.

En relación a la guarda y custodia debe recordarse que la **guarda y custodia compartida** no es una medida excepcional, sino que, especialmente a partir de la sentencia del tribunal supremo, de 29 de abril, se considera como la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a mantener dicha relación con ambos progenitores

(sentencia del tribunal supremo, de 30 de octubre) ; a lo que debe añadirse, que el análisis de las cuestiones sobre la **guarda y custodia de los menores debe** contemplar siempre el prevalente interés del menor, o, en otras palabras, el fin último del **artículo 92 código civil** es posibilitar la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de estos.

PROCESAL: Legitimacion del ministerio fiscal

Jurisdicción: Civil

Ponente: [Emma Galcerán Solsona](#)

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 11/10/2022

Tipo resolución: Sentencia

Sección: Primera

Número Sentencia: 362/2022

Número Recurso: 306/2022

Numroj: SAP VA 1810:2022

Ecli: ES:APVA:2022:1810

ENCABEZAMIENTO:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00362/2022

Modelo: N10250

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 **Fax:** 983413482/983458513

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MPD

N.I.G. 47186 42 1 2019 0018724

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000306 /2022

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 10 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001075 /2019

Recurrente: Blas

Procurador: CRISTINA BAJENETA MARTIN

Abogado: ALVARO PEREZ VILLANUEVA

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, Milagros

Procurador: , MARIA TERESA MARTIN GARCIA

Abogado: , MARÍA AZUCENA RUIZ GONZÁLEZ

SENTENCIA

Ilmo. Sr. Presidente: D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO SALINERO ROMÁN

D^a EMMA GALCERAN SOLSONA

En VALLADOLID, a once de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en grado de apelación, los autos de procedimiento ordinario núm. 1075/19 del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Valladolid, seguido entre partes, de una como **DEMANDANTE-APELANTE** D. Blas, representado por la Procuradora D^a CRISTINA BAJENETA MARTIN y defendido por el letrado D. ALVARO PEREZ VILLANUEVA, y de otra como **DEMANDADA-APELADA** D^a Milagros, representada por la Procuradora D^a MARIA TERESA MARTIN GARCIA y defendida por la letrada D^a MARÍA AZUCENA RUIZ GONZÁLEZ, habiendo intervenido el MINISTERIO FISCAL; sobre patria potestad.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 16.3.22, se dictó sentencia cuyo fallo dice así:

"Desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Bajeneta Martín en representación de D. Blas frente a Dña. Milagros acuerdo las siguientes medidas.

1º.-La atribución de la guarda y custodia de la hija menor habida en el matrimonio a D^a. Milagros pero ejerciendo conjuntamente ambos padres la patria potestad sobre aquella,

sin que proceda la privación de la patria potestad de la madre en relación a la hija común. Ambos progenitores mantendrán el ejercicio conjunto de la patria potestad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 154 y 156 del Código Civil. Por tanto, deberán comunicarse todas las decisiones que con respecto a su hija adopten en el futuro, así como todo aquello que conforme al interés prioritario de la hija deban conocer ambos padres. Deberán establecer el cauce de comunicación que mejor se adapte a sus circunstancias obligándose a respetarlo y cumplirlo. Ambos padres participarán en las decisiones que con respecto a la hija tomen en el futuro siendo de especial relevancia las que vayan a adoptar en el ámbito escolar, o en el sanitario y los relacionados con celebraciones religiosas. Sobre esa base se impone la intervención de ambos padres en decisiones relativas al cambio de centro escolar o cambio del modelo educativo. Se impone la decisión conjunta para cualquier tipo de intervención quirúrgica o de tratamiento médico no banal tanto si entraña un gasto como si está cubierto por algún seguro.

Los padres deberán ser informados por terceros de todos aquellos aspectos que afecten a su hija y concretamente tienen derecho a que se les facilite a los dos toda la información académica, y los boletines de evaluación e igualmente tienen derecho a obtener información a través de las reuniones habituales con los tutores o servicios de orientación del centro escolar tanto si acuden los dos como si lo hacen por separado.

De igual manera tienen derecho a obtener información médica de su hija y a que se les faciliten los informes que cualquiera de los dos solicite. El progenitor que en ese momento se encuentre en compañía de la hija podrá adoptar decisiones respecto a la misma sin previa consulta en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas decisiones diarias, poco trascendentes o rutinarias que en el normal transcurrir de la vida con una menor pueden producirse.

2.-Como régimen de visitas se establece que D. Blas podrá estar en compañía de su hija menor de edad de forma progresiva con entregas y recogidas en DIRECCION000 El primer sábado de cada mes en horario de 11,00 a 17,00 horas.

Si el informe del Centro, que se elaborará cumplidos los tres meses del inicio de la intervención es favorable se ampliará al domingo con el mismo horario sin pernocta.

Y transcurridos otros tres meses con informe favorable se ampliará a dos fines de semana alternos al mes con el mismo horario y sin pernocta. Y así de forma sucesiva hasta llegar a un régimen normalizado si las condiciones de la menor son propicias.

3.-En concepto de pensión alimenticia a favor de la hija, D. Blas deberá entregar a D^a. Milagros la cantidad de 100€ mensuales que serán pagada dentro de los cinco primeros días de cada mes y en doce mensualidades al año. Esta pensión se devengará desde la fecha de esta resolución. Dicha pensión será anualmente conforme al IPC.

Igualmente deberá satisfacer la mitad de los gastos extraordinarios que se produzcan en la vida de la hija considerando tales exclusivamente los relativos a la salud no cubiertos por Seguro público o privado, gastos de odontólogo, gafas, medicinas y prótesis; y

educacionales consistentes en clases de apoyo de asignaturas troncales siempre que se acrediten suficientemente, o sean autorizados por el Juzgado, en caso de discrepancia entre los padres."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación de D. Blas se interpuso recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria y por el Ministerio Fiscal se presentaron escritos de oposición al recurso. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 28 de septiembre de los corrientes, en que ha tenido lugar lo acordado.

Vistos, siendo ponente la Ilma. Sra. D^a Emma Galcerán Solsona.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Como ha declarado esta Sala en relación con la naturaleza del recurso de apelación, entre otras, en la sentencia de 27 de noviembre de 2008, RPL-252/2018, "la más adecuada solución del mismo determina la necesidad de entrar en el examen y valoración de la prueba que obra unida a las actuaciones y ha sido tenida en consideración por la Juez de Instancia, pues el carácter ordinario del recurso de apelación -que efectivamente lo es-, somete al Tribunal que del mismo entiende el total conocimiento de la controversia suscitada, si bien siempre dentro de los límites del objeto o contenido del recurso y con respeto a la obligada congruencia. Desde esta perspectiva cabe señalar que, tal y como ya es criterio uniforme, reiterado y constante de esta misma Audiencia Provincial (Sección Primera) en sintonía con el criterio jurisprudencial sentado, entre otras, en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2015, solo será factible criticar la valoración que efectúe el Juzgador "a quo" de la prueba practicada cuando la efectuada en la instancia fuese ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica (SSTS de 9 de marzo de 2010, 11 de noviembre de 2010); se hubiera incurrido en un error patente, ostensible o notorio (SSTS de 10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002); se extrajeren de la misma conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica (SSTS de 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002, 13 diciembre 2003, 9 junio 2004); o finalmente, si se adoptasen en ella criterios desorbitados o irracionales (SSTS de 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 junio 2002)."

Y en relación con la eficacia de la prueba de peritos, la Sala Primera tiene declarado (STS. de 22 de febrero de 2006, RC N° 1419/1999), que el juicio personal o la convicción formada por el informante con arreglo a los antecedentes suministrados no vincula a jueces y tribunales, que pueden apreciar esta según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a las conclusiones del perito (STS. de 16 de octubre de 1980), de las que pueden prescindir (STS. de 16 de febrero de 1994).

En relación con dicha cuestión, tiene declarado la jurisprudencia, asimismo, que los tribunales, al valorar los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica (art. 348 de la LEC), deberán ponderar los razonamientos que contengan los dictámenes y los que

se hayan vertido en el acto del juicio o vista en las declaraciones de los peritos, pudiendo no aceptar el Tribunal el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso aceptar el resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro; debiendo también tenerse en cuenta las conclusiones conformes y mayoritarias que resulten tanto de los dictámenes de peritos designados por las partes, como de los emitidos por peritos designados por el Tribunal, motivando su decisión cuando no esté de acuerdo con las conclusiones mayoritarias de los dictámenes, debiéndose examinar igualmente las operaciones periciales que se hayan realizado concretamente, los medios, métodos o instrumentos empleados y los datos en que se sustenten los dictámenes, así como la competencia profesional de sus autores y las circunstancias que hagan presumir su objetividad (SS.TS de 10 de febrero de 1994, 28 de enero de 1995, 31 de marzo de 1997, 30 de noviembre de 2010, 15 de diciembre de 2015, 17 de mayo de 2016, entre otras muchas).

SEGUNDO.- En el recurso de apelación interpuesto por el demandante, se solicita la revocación de la sentencia de primera instancia, y la estimación íntegra de la demanda, en la que se solicitó que se **acuerde la privación** a la madre de la patria potestad sobre la hija común, menor de edad, así como la atribución de la patria potestad en exclusiva al padre y la atribución de la guarda y custodia de la menor en exclusiva al padre, residiendo en el domicilio del padre en la ciudad de Lleida, estableciéndose asimismo un régimen de visitas para la madre consistente en fines de semana alternos de 10 h. del sábado a 20 h. del domingo, y una pensión de alimentos a favor de la menor y a cargo de la madre de 200 € mensuales actualizable anualmente.

TERCERO.- La sentencia de fecha 21 de septiembre de 2021, dictada por esta Sala en el recurso RPL-316/2021, f.d. Segundo, declara, En la sentencia de fecha 15 de febrero de 2021, RPL 374/20, dictada por esta Sala se declaró: "En esta materia, régimen de guarda y custodia, la doctrina jurisprudencial que cabe destacar es la contenida en las SS.

- TS. de 22 de julio de 2011,
- 29 de abril de 2013, 19 de julio de 2013
- 29 de noviembre de 2013
- , 2 de julio de 2014,
- 16 de febrero de 2015,
- 17 de enero de 2018,
- 30 de octubre de 2018, entre otras,

que ha sido analizada por el Juzgador de instancia, declarando la sentencia de primera instancia, FD. Primero, "Debe recordarse que tanto la patria potestad como el conjunto de actuaciones y medidas que se adopten respecto de los menores han de guiarse, como principio general y prevalente a cualesquiera otros en juego, incluido el de los padres o allegados, **por el superior interés y beneficio del menor**, como expresamente recogen

los arts. 92, 103, 154, 158, 161 172 y 176 del Código Civil, los arts. 2.1 párrafo 1º ("Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir ") y 11.2 a) de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, el art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (" En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño "), el art. 15 de la Carta Europea de los Derechos del Niño aprobada por Resolución A 3-0172/92, de 8 de julio (" Toda decisión familiar, administrativa o judicial, en lo que se refiere al niño, deberá tener por objeto prioritario la defensa y salvaguardia de sus intereses " -DOCE nº C 241, de 21 de septiembre de 1992-)."

"El art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero , en redacción dada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, apunta como criterios generales a tener en cuenta en orden a la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del menor, por este orden":

"a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas."

"b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés superior."

"c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia... "La Constitución española impelió al poder legislativo a la promulgación de la normativa necesaria para la protección del menor, siendo la más significativa, de inicio, en este orden la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción y otras formas de protección de menores. Más adelante se promulgó la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, Ley de Protección Jurídica del Menor. Estas dos leyes son las que vienen a modificar de forma sustancial en el ordenamiento jurídico estatal el régimen de protección del menor de edad. Toda esta normativa se ha visto poderosamente influenciada por los textos internacionales que se han ocupado de la protección de los menores, de los que destacan la Declaración Universal de los Derechos del Niño (Nueva York 1959) y la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York, 20 de noviembre de 1989). En toda la normativa internacional y estatal mencionada late el superior interés del menor como criterio determinante para la adopción de cualquier medida que les afecte, si bien dicho interés superior no aparece

definido, precisándose su configuración y concreción en cada caso. Se configura, pues, como un verdadero concepto jurídico indeterminado, que la doctrina ha venido relacionando bien con el desenvolvimiento libre e integral de la personalidad del menor y la supremacía de todo lo que le beneficie, más allá de las preferencias personales de sus padres, tutores, guardadores o administraciones públicas, en orden a su desarrollo físico, ético y cultural; bien con su salud y su bienestar psíquico y su afectividad, junto a otros aspectos de tipo material; bien, simplemente con la protección de sus derechos fundamentales."

"En relación a la guarda y custodia debe recordarse que la guarda y custodia compartida no es una medida excepcional, sino que, especialmente a partir de la STS nº 257/2013, de 29 de abril, se considera como la más normal, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a mantener dicha relación con ambos progenitores (STS nº 593/2018, de 30 de octubre); a lo que debe añadirse, que el análisis de las cuestiones sobre la guarda y custodia de los menores debe contemplar siempre el prevalente interés del menor, o, en otras palabras, el fin último del art. 92 CC es posibilitar la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de éste."

"Con esta premisa inicial deben de fijarse para determinar el régimen de guarda más adecuado criterios tales como:

- 1ª-la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales;
- 2ª-los deseos manifestados por los menores competentes;
- 3ª-el número de hijos;
- 4ª el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales;
- 5ª-el resultado de los informes exigidos legalmente, las circunstancias personales, laborales y económicas concurrentes y;
- 6ª-cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada para el correcto desarrollo de su personalidad.

Con estas premisas iniciales la STS de 19 de julio de 2013 establece : " se prima el interés del menor y este interés, que ni el artículo 92 del Código Civil, ni el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel". Lo que se pretende con un posible régimen de custodia-compartida es aproximar este régimen al modelo de

convivencia existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de seguir ejerciendo los derechos y obligaciones inherentes a la potestad o responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, (Sentencia 2 de julio de 2014, rec. 1937/2013), pero ello siempre que al mismo tiempo se aprecie como más beneficioso para los menores".

La patria potestad está concebida por la Ley en beneficio de los hijos y requiere el cumplimiento de los deberes descritos en el art. 154 del Código Civil, **de manera que cualquier limitación al ejercicio de la patria potestad**, debe salvaguardar el principio de protección del interés del menor, teniendo carácter excepcional privación de la patria potestad, debido a su gravedad, pudiendo aplicarse solamente en casos extremos, de modo que

- no basta la sola constatación de un incumplimiento, incluso grave, de los deberes paterno-filiales,
- sino que es necesario que su adopción venga aconsejada por las circunstancias concurrentes y resulte conveniente en un determinado momento y resulte conveniente para los intereses del menor, sin exceder de lo estrictamente necesario para lograr la mencionada finalidad de protección del interés del menor.

CUARTO.- Llegados a este punto, en el caso de autos quedó acreditado que la menor, de 12 años de edad, vive con su madre en la localidad de DIRECCION001, Valladolid, donde se encuentra escolarizada, quedando acreditado el comportamiento normalizado de la menor en el centro escolar, su madurez, su integración en todos los ámbitos, y su alto rendimiento escolar.

Asimismo quedó acreditado en las actuaciones, incluida la exploración de la menor, que hace años que la misma no se relaciona con su padre (residente en Lleida),

- solo le vio unas horas a la puerta del colegio en una ocasión,
- habló por teléfono con él un día durante la pandemia,
- negándose la menor de forma rotunda a relacionarse con aquél, relatando los malos recuerdos que tiene (abusos sexuales y también malos tratos contra la madre de la menor, siguiéndose un procedimiento penal contra el padre, en el que fue absuelto), con los consiguientes sentimientos de rechazo hacia el padre, de sufrimiento y grave daño emocional de la menor causados por aquellos.

Así las cosas, en el caso de **autos lo más beneficioso para la menor** es desestimar la petición de privación de la patria potestad de la madre, acordando el ejercicio conjunto por ambos progenitores de la patria potestad sobre la hija menor de edad, acordando al propio tiempo la atribución de su guarda y custodia en exclusiva a la madre de la menor, con el régimen de visitas establecido en el fallo de la sentencia recurrida, **régimen de**

visitas de carácter progresivo, con entregas y recogidas en DIRECCION000, e informes periódicos del Centro, con posible ampliación del régimen de visitas si los informes fuesen favorables, con los detalles consignados en el fallo de la sentencia de primera instancia.

En el caso enjuiciado, la convivencia de la menor con su madre garantiza

- la necesaria estabilidad emocional de la menor,
- así como el mejor desarrollo en todas sus vertientes, psicológico, afectivo, emocional, social, escolar, etc., garantizando el desarrollo integral de la menor, quien está debidamente atendida por su madre en todos los necesarios cuidados y dedicación en sus diversos aspectos, de un modo muy beneficioso para la menor, atendiendo a la protección del interés de la misma.

Las interferencias de la madre a que alude el informe psico-social (que no propone una alternativa de guarda y custodia), no pueden ser valoradas en ningún caso abstracta, hecha de las circunstancias relevantes concurrentes en el caso de autos, antes aludidas al referirnos a los malos recuerdos de la menor (remitiéndonos a ello) con los consiguientes sentimientos de rechazo hacia el padre, y de sufrimiento y grave daño emocional de la menor causados por aquéllos.

No cabe valorar aquéllas como si no concurrieran en el caso de autos las circunstancias relevantes antes mencionadas. Y lo cierto es que la sentencia de primera instancia valoró adecuadamente dichas circunstancias, teniendo en cuenta en todos los pronunciamientos el superior interés de la menor, a la vista del contenido de dichos pronunciamientos.

Por el Ministerio Fiscal se solicitó la atribución de la guarda y custodia de la menor a la madre, ejerciendo conjuntamente ambos progenitores la patria potestad, y con desestimación de la petición de privación de la misma a la madre, con un régimen de visitas gradual, en el centro de DIRECCION000 con informes periódicos del Centro para progresar si los mismos fuesen favorables.

Y por el Ministerio Fiscal se solicita la desestimación del recurso de apelación y la confirmación íntegra de la sentencia.

QUINTO.- De lo expuesto resulta la desestimación del recurso, confirmando íntegramente la sentencia, con imposición a la parte apelante de las costas del recurso de apelación, ex art. 398/1 LEC.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Se **desestima el recurso de apelación** interpuesto por la Procuradora Sra. Bajeñeta Martín, en nombre y representación de D. Blas, contra la sentencia nº 99/2022, de fecha 16/03/2022, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 10 de Valladolid en el Procedimiento Ordinario 1075/2019, confirmándola íntegramente, con imposición a la parte apelante de las costas del recurso de apelación.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.